

En la sesión ordinaria efectuada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

ANTECEDENTES:

Creación de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral

I. La Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, fue creada mediante el acuerdo CGIEEG/229/2015 de este Consejo General, aprobado en la sesión extraordinaria del diecinueve de septiembre de dos mil quince, en atención a la necesidad de mantener actualizada la normatividad interna de este organismo público local, de manera que se garantice la adecuada operatividad de sus estructuras orgánicas.

Integración actual de la Comisión

II. En la sesión extraordinaria efectuada el nueve de octubre de dos mil veinte, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/063/2020, mediante el cual se aprobó la integración -entre otras- de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, quedando de la manera siguiente:

María Concepción Esther Aboites Sámano	Presidenta
Sandra Liliana Prieto de León	Integrante
Beatriz Tovar Guerrero	Integrante
Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral	Secretaria(o) técnica(o)
Representantes de partidos políticos	Integrantes

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión

III. En la sesión ordinaria de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, este Consejo General aprobó el «Programa Anual de Trabajo 2021» de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, en que se contempla la actividad 2.2 consistente en presentar y aprobar la propuesta de «Reglamento en

materia de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato».

***Modificación del Programa
Anual de Trabajo de la Comisión***

IV. En la sesión extraordinaria de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/162/2021, mediante el cual se aprobó la modificación del «Programa Anual de Trabajo 2021» de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, en el que se aplazaron las actividades relativas a la presentación y aprobación de la propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, lo anterior, derivado de la importancia de atender primordialmente las actividades imprescindibles del proceso electoral 2020-2021.

***Trabajos de revisión y análisis de la propuesta
del Reglamento de Protección de Datos Personales***

V. En fechas veintiuno de julio y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral llevó a cabo mesas de trabajo para la revisión y análisis de la propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Acuerdo CTRNE/005/2021

VI. En la sesión extraordinaria del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral de este Instituto emitió el acuerdo CTRNE/005/2021, mediante el cual se aprueba la propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como su remisión a la Presidencia de este Consejo General.

Remisión del acuerdo CTRNE/005/2021 al Consejo General

VII. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el oficio número CTRNE/007/2021, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, por conducto de su Secretaría Técnica, remitió al Consejo General el acuerdo mencionado en el antecedente **VI** con su anexo.

CONSIDERANDO:

***Personalidad jurídica del Instituto
y principios que rigen su actuación***

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en

sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*.

Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Facultad normativa del Instituto

4. De conformidad con el artículo 92, fracción II, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución del Consejo General del Instituto dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicho ordenamiento legal.

Justificación de la propuesta del Reglamento de Protección de Datos Personales

5. De conformidad con lo asentado en el acuerdo CTRNE/005/2021 referido en el antecedente VI, la propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene su justificación en lo siguiente:

La protección de los datos personales, al igual que el derecho a la información, es un derecho humano consagrado en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (artículo 6, apartado A, fracciones I y II y 16, párrafo segundo) y en la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* (artículos 1 y 14, apartado B), el

cual se encuentra vinculado a la protección de la privacidad y de los datos de las personas, con el propósito de impedir su uso ilícito y vulneración.

Dicho derecho tiene sus orígenes en artículos de instrumentos internacionales como son: el artículo 12 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*¹, de fecha 10 de diciembre de 1948; el artículo 11 de la *Convención Americana de Derechos Humanos*² (Pacto de San José de Costa Rica) de 1966; el artículo 17 del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*³ del 19 de diciembre de 1966; el artículo 8 del *Convenio Europeo de Derechos Humanos*⁴ del 4 de noviembre de 1950; asimismo, la *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea* suscrita en Niza el 7 de diciembre de 2000. Respecto a lo cual, se debe precisar que, si bien en los preceptos aludidos no se encuentra un reconocimiento expreso del derecho a la protección de datos personales, se puede afirmar que, en el desarrollo de los derechos humanos, esta figura encuentra su antecedente más importante. Aunado a lo anterior, se debe decir que cada país, como lo ha sido en México, ha optado por configurar el derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas, a través de distintas figuras jurídicas.

En el referido párrafo segundo del artículo 16 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* se reconocen los denominados derechos ARCO, relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, como un medio para garantizar el derecho de las personas a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información.

Así, dicho derecho humano impone obligaciones a los particulares y a las instituciones públicas que utilizan datos personales y otorga derechos a las personas titulares de los datos, a fin de garantizar el buen uso de los mismos y el

¹ «Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques».

² «Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques».

³ «Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques».

⁴ «Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».

respeto a la privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, considerando a esta última como el derecho de las personas para decidir, de manera libre e informada, sobre el uso de su información personal.

En ese sentido, dichas prerrogativas constituyen el derecho a la protección de los datos personales, como un medio de salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, conforme a los cuales, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho de toda persona a no ser molestada por terceros o por una autoridad, en ningún aspecto de su persona –vida privada–, entre los que se encuentra el relativo a la forma en que se ve a sí misma y cómo se proyecta a las demás –honor–, así como de aquellos que corresponden a los extremos más personales de la vida y del entorno familiar –intimidad–, o que permiten el desarrollo integral de su personalidad –dignidad humana–.

En consonancia con lo anterior, la *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato* también prevé el ejercicio de los derechos ARCO como un medio de salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitución, como lo han establecido los organismos de control constitucional⁵, mediante los cuales se puede:

- a) Conocer quién dispone de los datos personales y para qué están siendo utilizados;
- b) Solicitar rectificación de los datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;
- c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y

⁵ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CONSTITUYE UN DERECHO VINCULADO CON LA SALVAGUARDA DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES INHERENTES AL SER HUMANO. El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los denominados derechos ARCO, relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, como un medio para garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información. Así, dichas prerrogativas constituyen el derecho a la protección de los datos personales, como un medio de salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte, conforme a los cuales, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho de todo individuo a no ser interferido o molestado por terceros o por una autoridad, en ningún aspecto de su persona –vida privada–, entre los que se encuentra el relativo a la forma en que se ve a sí mismo y cómo se proyecta a los demás –honor–, así como de aquellos que corresponden a los extremos más personales de la vida y del entorno familiar –intimidad–, o que permiten el desarrollo integral de su personalidad como ser humano –dignidad humana–. (Décima Época, Tesis: I.10o.A.5 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 2199. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO).

- d) Oponerse al uso de los datos si es que los mismos fueron obtenidos sin el consentimiento de la persona titular.

En otro orden de ideas, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral señala la necesidad de abrogar el *Reglamento en materia de protección de datos personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, actualmente en vigor.

Lo anterior, porque este Consejo General, el catorce de diciembre de dos mil seis, mediante el acuerdo CG/229/2006, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 206, primera parte, el veintiséis de diciembre de dos mil seis, aprobó el citado reglamento; el cual, si bien fue reformado en su artículo 3, fracción VI, mediante el acuerdo aprobado por este órgano superior de dirección el veintiuno de agosto de dos mil catorce, por acuerdo CG/033/2014 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 140, séptima parte, el dos de septiembre de dos mil catorce, en diversos aspectos ha quedado desfasado derivado de la entrada en vigor de la actual *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato*, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día catorce de julio de dos mil diecisiete, con reformas publicadas en el mencionado medio de difusión oficial el cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

En este sentido, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral considera necesaria la emisión de una nueva reglamentación que reconozca y proteja de manera efectiva el derecho a la preservación de la intimidad de las personas. Consideración con la cual coincide este Consejo General.

Así las cosas, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral trabajó en la elaboración de la propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la cual se contiene en el **anexo único** del presente acuerdo, y se integra por un total de 38 artículos distribuidos en tres títulos, dos secciones y dos capítulos, de conformidad con lo siguiente:

El Título primero, denominado «Disposiciones generales» se integra por artículos que regulan la naturaleza y objeto del reglamento, su interpretación, el glosario de términos, la competencia de la Unidad de Transparencia del Instituto, así como la aplicación e interpretación normativa, el ámbito de competencia para lo no previsto en sus disposiciones y los principios rectores de la protección de datos personales.

El Título segundo, identificado como «Datos personales y su protección», se integra por normas reglamentarias de temas relativos a los datos personales y su protección, las medidas de seguridad, al contenido mínimo del documento de seguridad, su revisión y actualización; el Sistema de Gestión en que quedarán documentadas y contenidas las acciones que desarrollen para establecer y mantener las medidas de seguridad, al principio de consentimiento en el tratamiento de datos personales y a las causales de excepción al mismo.

El Título tercero, nombrado como «Derechos de las personas titulares y su ejercicio», integrado a dos secciones:

- a) Sección primera, identificada como «De los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», integrada por normas reguladoras de los derechos ARCO, es decir, del derecho humano contenido en el artículo 16, párrafo segundo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que señala que toda persona tiene derecho a la salvaguarda de su información personal y además, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en los términos que fije la ley; y
- b) Sección segunda, denominada «Procedimientos para ejercer derechos ARCO», misma que a su vez se conforma por dos capítulos. El primero denominado «Procedimiento genérico» y el segundo «Trámite o procedimiento específico», en los cuales se prevén disposiciones relacionadas con la gratuidad del ejercicio de los derechos ARCO; las persona facultada para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos personales; la presentación y requisitos de la solicitud; la formulación de prevenciones; la reconducción de la solicitud; casos de incompetencia; la procedencia e improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO; las particularidades de la procedencia de la solicitud; los casos de inexistencia de los datos personales; la ampliación del plazo; así como la disponibilidad de los datos personales o constancias; la notificación de la respuesta; el envío de datos personales o constancias; así como la reglamentación del recurso de revisión.

La sección en comento también contiene un capítulo denominado «Trámite o procedimiento específico», en el que se prevé que cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, la unidad administrativa a la que le fue turnada la solicitud deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia a efecto de que por su conducto se notifique a la persona solicitante y ésta decida si ejerce sus

derechos a través del trámite específico que corresponda, o bien, por medio del procedimiento genérico. Asimismo, se establece la aplicación supletoria de la *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato* en lo no previsto expresamente en el Reglamento.

Finalmente, la propuesta que nos ocupa contiene dos disposiciones transitorias relativas a la entrada en vigor y la abrogación del reglamento actualmente vigente.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*; 77, párrafos primero y segundo, 81 y 92, fracción II, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba el *Reglamento de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, el cual constituye el **anexo único** de este acuerdo.

SEGUNDO. Publíquense el presente acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Título primero Disposiciones Generales

Naturaleza y objeto

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Tiene por objeto regular las disposiciones que regirán el debido tratamiento de los datos personales, que se encuentren en poder de las personas servidoras públicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante los procedimientos establecidos en este Reglamento.

Interpretación

Artículo 2. Las personas servidoras públicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como toda persona o institución vinculada con el tratamiento de datos personales que realicen este Instituto en el ejercicio de sus atribuciones, deberán garantizar la observancia de los principios y deberes de protección de datos personales, previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, en el presente Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Glosario

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. Por cuanto a ordenamientos jurídicos:

- a) **Ley de Protección:** Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato;
- b) **Lineamientos:** Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y
- c) **Reglamento:** Reglamento en materia de protección de datos personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

II. Por cuanto a organismos, entidades y órganos:

- a) **Comité de Transparencia:** Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
- b) **Instituto:** Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
- c) **IACIP:** Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato;
- d) **Unidad Administrativa:** Órganos de Dirección, Ejecutivos, Técnicos, de Control y otros órganos colegiados, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que en cumplimiento de sus atribuciones puedan tener información sobre datos personales bajo su resguardo; y
- e) **Unidad de Transparencia:** Unidad de Transparencia del Instituto.

III. Por cuanto a conceptos:

- a) **Base de datos:** Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados que permitan su tratamiento, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;
- b) **Bloqueo:** Identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su supresión en la base de datos, archivo, registro, expediente o sistema de información que corresponda;
- c) **Consentimiento:** Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la o el titular, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales;
- d) **Datos Personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

- e) **Derechos ARCO:** Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;
- f) **Documento de seguridad:** Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad de carácter técnico, físico y administrativo adoptadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que se poseen;
- g) **Medidas de seguridad:** Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales;
- h) **Medidas de seguridad administrativas:** Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de los datos personales a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de los datos personales, así como la sensibilización y capacitación del personal en materia de protección de datos personales;
- i) **Medidas de seguridad físicas:** Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento;
- j) **Medidas de seguridad técnicas:** Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento;
- k) **Persona servidora pública:** Quien desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Instituto;
- l) **Persona solicitante:** Quien es titular de los datos personales o su representante;
- m) **Titular:** Persona física a quien corresponden los datos personales;
- n) **Plataforma Nacional:** Plataforma Nacional de Transparencia;

- o) Sistema de gestión:** Conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con la normativa aplicable;
- p) Supresión:** Baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas; y
- q) Tratamiento:** Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos físicos o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas, de manera enunciativa más no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, estructuración, adaptación, modificación, extracción, consulta, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia y en general cualquier uso o disposición de datos personales.

Competencia de la Unidad de Transparencia

Artículo 4. La Unidad de Transparencia tendrá a su cargo el desarrollo de los procedimientos que regulan el ejercicio de los derechos ARCO, con el apoyo de la Unidad Administrativa que corresponda.

Aplicación e interpretación normativa

Artículo 5. La aplicación e interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, el derecho a la protección de datos personales y atendiendo a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Asimismo, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales.

Ámbito de competencia para lo no previsto

Artículo 6. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Comité de Transparencia, con excepción de los relativos a los datos personales contenidos en el Padrón Electoral, que serán resueltos por los órganos

especializados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Principios

Artículo 7. En todo tratamiento de datos personales, las personas servidoras públicas deberán observar los principios rectores de la protección de datos personales, licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, en términos de lo previsto por la Ley de Protección y los Lineamientos.

Título segundo

Datos personales y su protección

Sistemas de datos personales

Artículo 8. Las Unidades Administrativas que posean, por cualquier título, sistemas o bases de información que contengan datos personales, deberán hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia, con la finalidad de establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales.

Medidas de seguridad

Artículo 9. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

La información necesaria para conformar el documento de seguridad a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Protección, se remitirá al comité de transparencia, para fines de supervisión y conforme al procedimiento y plazos que dicho órgano colegiado apruebe.

Contenido mínimo

Artículo 10. El documento de seguridad deberá contener, al menos, lo siguiente:

- I. Las funciones y obligaciones del responsable, encargados y todas las personas que traten datos personales;
- II. El inventario de los datos personales y de los sistemas de tratamiento;
- III. El análisis de riesgos;
- IV. El análisis de brecha;
- V. El plan de trabajo;

- VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; y
- VII. El programa general de capacitación.

Revisión y actualización

Artículo 11. El responsable deberá revisar el documento de seguridad de manera periódica, así como actualizar su contenido cuando ocurran los siguientes eventos:

- I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;
- II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;
- III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida, y
- IV. Se implementen acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad ocurrida.

Sistema de Gestión

Artículo 12. La Unidad de Transparencia implementará el sistema de gestión, en el que quedarán documentadas y contenidas las acciones que desarrollen para establecer y mantener las medidas de seguridad de previa alusión; a saber:

- I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
- II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales;
- III. Elaborar un inventario de los datos personales y de las bases y/o sistemas de tratamiento;
- IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros;
- V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable;

- VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;
- VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales; y
- VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación de su personal, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

***Principio de consentimiento en
el tratamiento de datos personales***

Artículo 13. El Instituto deberá obtener el consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos personales, salvo que se actualice alguna causal de excepción prevista en el artículo 19 de la Ley de Protección.

***Causales de excepción al
principio de consentimiento***

Artículo 14. No será necesario el consentimiento de la o el titular para la transferencia de sus datos personales, cuando la utilización de estos sea necesaria para las unidades administrativas, en el ámbito de su competencia, para el ejercicio de las facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, debiéndose respetar la confidencialidad y el uso adecuado de la información.

Además, se atenderá a las excepciones siguientes:

- I. Cuando la transferencia esté prevista en ley o tratados internacionales suscritos y ratificados por México;
- II. Cuando la transferencia se realice entre personas responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;
- III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;
- IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;

- V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, el tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;
- VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y la o el titular;
- VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés de la o el titular, por la persona responsable y un tercero.
- VIII. Cuando se trate de los casos en los que la persona responsable no esté obligada a recabar el consentimiento de la o el titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley de Transparencia; o
- IX. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional.

Título tercero Derechos de las personas titulares y su ejercicio

Sección primera

De los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Derecho de Acceso

Artículo 15. La o el titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como a conocer la información relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su tratamiento.

Derecho de rectificación

Artículo 16. La o el titular tendrá derecho a solicitar al Instituto la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

Derecho de cancelación

Artículo 17. La o el titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas de las unidades administrativas, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por éstas.

Derecho de oposición

Artículo 18. La o el titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

- I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio a la o al titular; y
- II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados, o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

Sección segunda

Procedimientos para ejercer derechos ARCO

Capítulo I

Procedimiento genérico

Gratuidad del ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 19. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, en los términos establecidos en la Ley de Protección y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Unidad de Transparencia podrá exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona solicitante.

Para la presentación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, no se podrá establecer algún servicio o medio que implique un costo a la o al titular.

Persona facultada

Artículo 20. La o el titular o la persona que designe en su representación, podrá solicitar al Instituto a través de la Unidad de Transparencia, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales.

Para el ejercicio de derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por la ley civil del estado de Guanajuato, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

En el caso de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos ARCO, siempre que la o el titular de los mismos hubiere

expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

Para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que la o el titular acredite ante este Instituto su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe quien lo represente.

Presentación de la solicitud

Artículo 21. La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá formularse mediante escrito libre o con apoyo de los formatos que para tal efecto la Unidad de Transparencia ponga a disposición de la persona solicitante. Su presentación, podrá ser de manera presencial, por correo electrónico, vía Plataforma Nacional, o bien, por cualquier otro medio que se disponga.

Si la solicitud se presenta y recibe en alguna Unidad Administrativa, deberá remitirla a la Unidad de Transparencia a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción.

Tratándose del ejercicio de los derechos ARCO respecto de datos personales contenidos en los padrones de militantes de los Partidos Políticos, se deberá estar a lo dispuesto en los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Validación de datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Requisitos de la solicitud

Artículo 22. La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán exigirse mayores requisitos que los siguientes:

- I. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
- II. Descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita la o el titular;
- III. Los documentos que acrediten la identidad de la o el titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante;
- IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso; y
- V. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud.

Prevención

Artículo 23. En caso de que la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO no satisfaga alguno de los requisitos previstos en la Ley de Protección, y la Unidad de Transparencia no cuente con elementos para subsanarla, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se prevendrá a la persona solicitante para que, por una sola ocasión, subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la prevención.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la Unidad Administrativa para dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. En caso de que la persona solicitante atienda satisfactoriamente el requerimiento de información, el plazo para dar respuesta a la solicitud empezará a correr al día hábil siguiente al del desahogo.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte de la persona solicitante, se tendrá por no presentada la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

Reconducción de la solicitud

Artículo 24. En caso de que la Unidad de Transparencia advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponde a un derecho diferente de los previstos en la Ley de Protección, deberá reconducir la vía y hacer del conocimiento a la persona solicitante dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud.

Incompetencia de la Unidad de Transparencia

Artículo 25. Si la Unidad de Transparencia considera ser incompetente para conocer y dar trámite a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, lo notificará a la persona solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de su solicitud fundando, y motivando las razones de su incompetencia y, en caso de poderlo determinar, le señalará la autoridad obligada competente.

Turno de la solicitud

Artículo 26. El día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud o al del cumplimiento de la prevención correspondiente, la Unidad de Transparencia deberá turnar la solicitud a las Unidades Administrativas que les corresponda el tratamiento, resguardo o posesión de los datos personales de que se trate.

Incompetencia de la Unidad Administrativa

Artículo 27. Cuando la solicitud no sea competencia de la Unidad Administrativa a la que se le turnó, o ésta considere que la solicitud no satisface algún requisito, deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación del turno, fundando y motivando las razones de su incompetencia y, en caso de poderlo determinar, deberá sugerir el turno a la Unidad Administrativa que considere competente.

Si la Unidad Administrativa es competente para atender parcialmente la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá dar respuesta conforme a su competencia en el plazo establecido en el artículo 80 la Ley de Protección.

Improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 28. El ejercicio de los derechos ARCO no será procedente cuando se actualice alguna de las causales siguientes:

- I. La o el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;
- II. Los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;
- III. Exista un impedimento legal;
- IV. Se lesionen los derechos de un tercero;
- V. Se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
- VI. Exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de estos;
- VII. La cancelación u oposición haya sido previamente realizada, respecto al mismo titular, responsable y datos personales;
- VIII. El responsable no sea competente;
- IX. Sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados de la o el titular; o
- X. Sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por la o el titular.

En todos los casos anteriores, deberá constar una resolución que confirme la causal de improcedencia invocada por el responsable, la cual será informada a la o al titular por el medio señalado para recibir notificaciones y dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a su emisión.

La Unidad Administrativa deberá remitir al Comité de Transparencia, por conducto de la Unidad de Transparencia, en un plazo de doce días hábiles contados a partir de que recibió la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO que corresponda, un oficio en el que funde y motive su determinación, acompañando, en su caso, las pruebas conducentes, así como el expediente formado con motivo de la solicitud, a

efecto que el Comité de Transparencia resuelva si confirma, modifica o revoca la improcedencia manifestada.

En caso de que la determinación del comité confirme la improcedencia, dicha circunstancia se hará del conocimiento de la o el titular, quién podrá actuar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento.

Procedencia de la solicitud

Artículo 29. De ser procedente el ejercicio del derecho ARCO, la Unidad Administrativa, deberá comunicar a la Unidad de Transparencia la respuesta que se dé a la solicitud de que se trate, dentro de los doce días hábiles siguientes a aquél en que haya recibido el turno de la solicitud.

La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la persona solicitante, dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la solicitud y de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta a la persona solicitante.

Particularidades de la procedencia de la solicitud

Artículo 30. De manera particular, para la determinación de la procedencia de los derechos ARCO, se deberá observar lo siguiente:

- I. Tratándose del derecho de acceso a datos personales, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la Unidad de Transparencia, deberá poner a disposición de la persona solicitante, previa acreditación de su identidad, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copias certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales y holográficos, o cualquier otra tecnología que determine la persona solicitante.

Para tal efecto, la Unidad Administrativa deberá atender la solicitud en la modalidad elegida por la persona solicitante, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a así realizarlo, debiendo ofrecer otras modalidades de entrega, fundando y motivando su actuación.

- II. Para el caso de que se ejerza el derecho de rectificación de datos personales, la Unidad Administrativa, deberá confrontar los datos personales proporcionados por la persona solicitante con aquellos que obren en sus registros, archivos, sistemas de información, expedientes, bases de datos o documentos en su posesión, a efecto de verificar que lo solicitado sea procedente. De ser necesario, la Unidad Administrativa solicitará por escrito a la Unidad de Transparencia que requiera a la

persona solicitante la información que se considere pertinente, a efecto de comprobar la exactitud de los datos.

Si resulta procedente la rectificación de los datos personales, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la Unidad de Transparencia notificará a la persona solicitante, previa acreditación de su identidad, una constancia que acredite la corrección solicitada, misma que deberá señalar al menos, el nombre completo de la persona solicitante, los datos personales corregidos, así como la fecha a partir de la cual fueron rectificados.

- III.** Respecto del derecho de cancelación, la Unidad Administrativa deberá analizar las causas que motivan la solicitud de suprimir los datos personales.

De ser procedente la cancelación de datos personales, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la Unidad Administrativa correspondiente, deberá emitir una constancia que señale la localización de los datos personales objeto de cancelación; en su caso, el periodo de bloqueo de los datos personales y las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas durante ese periodo; y, las políticas, métodos y técnicas utilizadas para la supresión definitiva de los datos personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

Posterior a la emisión de la constancia, la Unidad de Transparencia deberá notificarla a la persona solicitante, previa acreditación de su identidad.

- IV.** En caso de resultar procedente la oposición al tratamiento de los datos, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la Unidad de Transparencia notificará a la persona solicitante, previa acreditación de su identidad, la constancia emitida por la Unidad Administrativa en la que se señale el cese del tratamiento.

La Unidad Administrativa que corresponda, analizará la causa legítima o la situación específica manifestada por la o el titular para ejercer el derecho de oposición, así como el daño o perjuicio que pueda ocasionarle la persistencia del tratamiento de sus datos personales, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer ese derecho.

La acreditación de la identidad de la o el titular de los derechos ARCO o de su representante, se hará en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley de Protección.

Inexistencia de los datos personales

Artículo 31. Cuando los datos personales no obren en los archivos, registros, sistemas o expedientes del Instituto, la Unidad Administrativa a la que le fue turnada la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro del plazo de los doce días hábiles siguientes, deberá elaborar un informe fundado y motivado, donde se expongan las gestiones que realizó para la localización de los datos personales, el cual, deberá ser enviado al Comité de Transparencia, por conducto de la Unidad de Transparencia, a efecto que se haga constar en una resolución la confirmación de la inexistencia de los datos personales.

Ampliación del plazo

Artículo 32. Dentro de los doce días hábiles siguientes al turno de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, la Unidad Administrativa podrá pedir a la Unidad de Transparencia, mediante correo electrónico, de forma fundada y motivada, una prórroga de hasta diez días hábiles para dar respuesta.

La Unidad de Transparencia notificará la prórroga a la persona solicitante, dentro del plazo de veinte días que establece la Ley de Protección para dar respuesta a la solicitud.

En ningún caso, la Unidad Administrativa podrá solicitar la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud, si los datos personales son inexistentes.

En caso de que no proceda la prórroga, la Unidad Administrativa deberá comunicar a la Unidad de Transparencia la respuesta que se dé a la solicitud de que se trate, dentro del plazo previsto en el artículo 29 de este Reglamento.

Disponibilidad de los datos personales o constancias

Artículo 33. La Unidad de Transparencia, pondrá a disposición de la persona solicitante, los datos personales en el medio de reproducción solicitado y/o las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO, durante un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la respuesta realizada a la persona solicitante.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad de Transparencia deberá dar por concluida la atención a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y proceder a la destrucción del material en que se reprodujeron los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO.

Notificación de la respuesta

Artículo 34. La respuesta otorgada a la solicitud de derechos ARCO, será notificada a la persona solicitante a través de la Unidad de Transparencia, previa acreditación de su identidad, de manera presencial, o por la Plataforma Nacional o correo certificado, en cuyo caso no procederá la notificación a través de su representante para éstos últimos medios.

Envío de datos personales o constancias

Artículo 35. El envío de datos personales podrá ser a través de correo certificado o medios electrónicos, siempre que se acredite fehacientemente ante la Unidad de Transparencia la identidad de la persona solicitante, para lo cual, la Unidad de Transparencia deberá dejar constancia de la acreditación de la persona solicitante.

Recurso de revisión

Artículo 36. Si en el ejercicio de los derechos ARCO, la persona solicitante considera que se actualiza alguna causal de las previstas en el artículo 129 de la Ley de Protección, podrá interponer un recurso de revisión ante el IACIP o la Unidad de Transparencia, por sí mismo o a través de su representante, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la respuesta a su solicitud.

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, la o el titular o, en su caso, su representante podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.

En caso de que el recurso de revisión se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitirlo al IACIP, sin mayor trámite, a más tardar al día hábil siguiente de haberlo recibido.

El recurso de revisión se tramitará en los términos previstos por la Ley de protección.

Capítulo II

Trámite o procedimiento específico

Trámite específico

Artículo 37. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, la Unidad Administrativa a la que le fue turnada la solicitud, deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia dentro de los dos días hábiles siguientes al turno, a efecto de que por su conducto sea notificado a la persona solicitante, y ésta decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico que corresponda, o bien, por medio del procedimiento genérico, para lo cual contará con un plazo de cinco días a contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación. En caso de que la persona solicitante no se manifieste, se entenderá que ha elegido la vía establecida en la Ley de Protección.

Caso contrario, si manifiesta su deseo de ejercer sus derechos mediante el trámite específico respectivo, se le orientará sobre el trámite a seguir ante la Unidad Administrativa competente y, con ello, se dará por concluido el procedimiento de ejercicio de derechos ARCO.

Aplicación supletoria

Artículo 38. En lo no previsto expresamente en el presente Reglamento, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley de Protección y demás normativa aplicable en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento en materia de protección de datos personales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobado mediante el acuerdo CG/229/2006 el catorce de diciembre de dos mil seis y reformado el veintiuno de agosto de dos mil catorce mediante acuerdo CG/033/2014.